

## RADICACION DE CERTIFICADOS DEL COMITE DE DEFENSA JUDICIAL Y SECRETARIA TECNICA DE COLPENSIONES

Maren Hisel Serna Valencia <marenhisels@gmail.com>

Mié 06/03/2024 16:36

Para: Juzgado 17 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (397 KB)

CERTIFICACIÓN MARTHA LUCIA CARO RINCON .pdf; CERTIFICACIÓN SEGUNDA HILDA MELO PARADA .pdf;

Buenas tardes.

Doctor:

**OSCAR JULIAN BETANCOURT ARBOLEDA**

JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI -VALLE

E.S.D.

**MAREN HISEL SERNA VALENCIA**, mayor de edad, de esta vecindad, abogada en ejercicio, identificada con C.C No 1.077.423.919 de Quibdó y T.P. 204.944 del C.S de la J., actuando en mi condición de apoderada judicial externo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-**, respetuosamente manifiesto al Despacho que allego las siguientes actas expedida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad que hoy represento, que detallaré a continuación:

- **76001310501720230058200 MARTHA LUCIA CARO RINCON**
- **76001310501720230060300 SEGUNDA HILDA MELO PARADA**

Gracias por su atención.

**CERTIFICACIÓN NO. 036472024**

**La secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial**

**CERTIFICA**

Que tal y como consta en el Acta No. 035-2024 del 26 de febrero de 2024 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del proceso bajo radicado No **76001310501720230058200** instaurado por el (la) ciudadano(a) **MARTHA LUCIA CARO RINCON** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **39537570**, en, quien pretende: que se declare la nulidad de la afiliación del Régimen de ahorro individual con solidaridad al Régimen de prima media con prestación definida En caso de declararse la nulidad del traslado es competente la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la señora MARTHA LUCIA CARO RINCON, dicho órgano decidió :

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

De conformidad con las pretensiones incoadas en el libelo petitorio, resulta imperioso señalar que, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, carece de legitimación en la causa por pasiva, como se pasará a exponer. No obstante, con relación al tema que nos ocupa se debe señalar que, inicialmente se crearon los regímenes solidarios, el RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA y el RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, siendo para los trabajadores la afiliación libre y voluntaria, pudiendo escoger entre uno u otro. Respecto al primer régimen, esto es el de prima media con prestación definida, el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, señala que es “aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización previamente definida”.

Sobre este provisto, la doctrina ha señalado que algunas de las características principales de este régimen son:

“-Las cotizaciones hacen el papel de la prima de un seguro que garantiza la pensión. En consecuencia, y como corresponde a toda prima de seguro, la cotización a pagar es considerablemente menor que el beneficio que se recibirá como pensión.

-Como sistema de aseguramiento, el régimen solo garantiza el beneficio, es decir, la pensión, si se cumplen plenamente los requisitos legales. Ello implica la presencia simultánea de las condiciones de cotización y de edad del afiliado.

En caso de no acreditarse los requisitos legales para obtener la pensión, dado el sistema de aseguramiento que lo caracteriza, el sistema no devuelve primas o cotizaciones, razón por la cual, quien no cumpla dichos requisitos no tendrá el derecho a la pensión, sino a una indemnización sustitutiva, “equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el

número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplicada el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado” . Por otro lado, el régimen de ahorro individual con solidaridad se caracteriza por la financiación de las pensiones mediante una cuenta de ahorro individual, manejada por la entidad administradora pero cuya titularidad corresponde al afiliado, quien financiara su pensión directamente con sus cotizaciones. El artículo 59 de la Ley 100 de 1993 define este régimen como “el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este título” Las características de este régimen han sido definidas por la doctrina de la siguiente manera: - “Los aportes o cotizaciones no se destinan a un fondo común, sino que están depositados en una cuenta pensional individual. Dichos recursos se depositan en uno de los fondos de pensiones que manejan las entidades administradoras, de manera que con el monto de la cuenta y sus rendimientos financieros se financia cada pensión. -Como sistema de capitalización, el derecho a obtener la pensión no depende del tiempo de cotizaciones ni de la edad del afiliado, sino de la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de ahorro individual, de la cual la entidad administradora lleva plena registro.

-En caso de no obtenerse la pensión por insuficiencia de capital acumulado, el sistema prevé mecanismos para la devolución de saldos, pues el único titular del capital es el afiliado” Frente al traslado de regímenes se debe precisar lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, el cual modificó las condiciones para trasladarse de régimen, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 2°. Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así: ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.

... e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)

Al margen de lo anterior, resulta necesario analizar la situación a la luz de la sentencia C-1024 de 2004 de la Corte Constitucional declaró exequible el subrayado aparte: “El afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros.”

De la lectura anterior, se deduce que es inviable declarar el traslado de régimen pensional en cualquier tiempo, puesto que la parte demandante no cuenta con los 15 años o más de servicios

cotizados al momento de entrar en vigencia al Sistema de seguridad Social en Pensiones la Ley 100 de 1993, tiempo requerido por la sentencia unificada 062 de 2010, para efectuar el traslado en cualquier tiempo, pues en atención a la reiterada jurisprudencia que ha tratado el tema del traslado del RAIS al RPM, sentencias como a modo de ejemplo la T789/2002, T-168 de 2009 C-789 de 2002, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013, todas con efectos erga omnes, concluyendo en todas que aquellos afiliados que les faltara menos de 10 años para acceder a la prestación económica de vejez, para trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, debería acreditar 15 años de servicios al 1° de abril de 1994, requisito con el cual la parte demandante no cumple, tal y como se puede observar en el reporte de semanas cotizadas en pensión aportados con la demanda.

Ahora, el artículo 1502 del Código Civil, dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que consienta en dicho acto o declaración de voluntad y su consentimiento no adolezca de vicios.

Vicios del Consentimiento. Para la validez de un acto jurídico es necesaria la manifestación de la voluntad del agente o agentes que intervienen en su declaración; pero para su validez de dicho acto es indispensable que dicha voluntad sea sana, es decir, que no adolezca de vicios pues su presencia destruye la libertad y la conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. El artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son: el error, la fuerza y el dolo.

De igual manera, dentro de un acuerdo de voluntades se presume la buena fe de las partes intervinientes, por lo que, en determinado momento, quien alegue que se vició su consentimiento, deberá probarlo.

Los vicios de consentimiento que pueden afectar las declaraciones de la voluntad no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente dentro del respectivo proceso judicial.

En el desarrollo de la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, esclareció que es la persona que indica que una actuación, documentos o declaración están viciados en el consentimiento por el error, la fuerza o el dolo consagrados en los artículos 1508 a 1516 del Código Civil, quien tiene el deber de demostrar y acreditar probatoriamente lo que acusa, esto es, que actuó bajo presión.

Como ya enuncié anteriormente, y con ánimo de enfatizar y reiterar el planteamiento esbozado, improcedente resulta declarar las nulidades solicitadas y las consecuentes pretensiones; de ser admitidas sus pretensiones se estaría violando el principio de legalidad de la administración pública, y desconociendo el ordenamiento jurídico y jurisprudencial previsto para el caso que nos ocupa. Por lo anterior, al ser el contrato de afiliación suscrito entre la parte demandante y la AFP privada legalmente válido y por haberse conocido debidamente la información concerniente a la afiliación al régimen en que se encuentra no habría lugar a declararse que existiera vicios del consentimiento, en este caso, no hubo error, por lo cual estaría debidamente cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 1502 del código civil de Colombia.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión "al cual se encuentran afiliados" contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó: "Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho." (Subrayado y negrilla fuera de texto original). Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente: "La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino "apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad". En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo "se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo" Por último, precisó que "la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares", razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos". Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría. Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que "el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato". Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

En la Sentencia SU-062 de 2010 la Corte destacó: "Por lo anterior, resulta imperativo ajustar la jurisprudencia constitucional a la normatividad vigente y reiterar lo indicado por esta corporación

en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004”. En concordancia con lo dicho, y aun cuando el punto no era la materia propia de decisión, la citada sentencia de unificación también retomó el tema referente a la posibilidad de retornar en “cualquier tiempo” al régimen de prima media con el fin de pensionarse de acuerdo con las normas anteriores a la Ley 100/93, destacando que tal retorno no opera para todos los sujetos del régimen de transición indistintamente, sino para una categoría de ellos, es decir, para quienes a 1° de abril de 1994 contaban con 15 años o más de servicios cotizados. Bajo este criterio, se acoge nuevamente lo expuesto en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, en las que se interpretó el alcance de los artículos 13 y 36 de la Ley 100/93.” En consecuencia, de conformidad con la ley y la jurisprudencia Constitucional solo quienes tienen 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con el fin de hacer efectivos los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, deberán trasladar a este todo el ahorro que hayan efectuado al régimen de ahorro individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

De esta forma la Corte Constitucional solo ha permitido el traslado en cualquier tiempo en los eventos que un afiliado que inicialmente pertenecía al RPM se afilia al RAIS y desea volver al primero. Podrá hacerlo siempre y cuando conserve el régimen de transición y adicionalmente acredite 15 años de cotización al 1 de abril de 1994.

Respecto a la declaración de nulidad del traslado de afiliación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, reiterada en Sentencia del 22 de noviembre de 2011, consideró:

“Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora.

Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura. Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual. La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para

todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información. La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada”.

Así las cosas, corresponde a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Probar que la información que suministró a la parte demandante al momento de efectuar el traslado y posterior afiliación fue idónea para crear una proyección veraz frente a su situación pensional, sin dejar lugar a dudas o falsas expectativas al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se ha venido insistiendo, existe una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, pues esta entidad no es la llamada a responder por las pretensiones incoadas en la demanda en tanto la parte demandante se encuentra afiliada actualmente a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., entidad que eventualmente deberá efectuar el traslado de régimen solicitado al fondo donde la parte demandante se encontraba afiliada.

De igual forma revisado los aplicativos de afiliaciones e historia laboral no se encuentra cotizaciones ni afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación definida, así las cosas, existe falta de



legitimación en la causa por pasiva por parte de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

Ahora bien, respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime en seguir la tesis Constitucional (Sentencia C-965 de 2003, Consejo de Estado sentencia del 25 de julio de 2011 expediente: 20.146, sentencia de 23 de octubre de 1990 expediente 6054 Consejo de Estado, Sentencia del 11 de noviembre de 2009 expediente 18166) respecto de la legitimación en la causa expuesta en la sentencia de fecha 14 de marzo de 2012, radicación: 76001-23-25-000-1997-03056-01 (22.032), Actor: ELIZABETH VALENCIA Y OTROS, Demandado: LA NACIÓN- MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, al señalar:

“(…) con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” de tal forma, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas”. Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien la demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

En este sentido, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

“(…) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por pasiva o activa) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas pues querrá decir quien las adujo o la persona contra la que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...) (...) Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir, de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no constituye enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque el haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo ataco no es la persona que frente a la Ley tiene el interés sustantivo para hacerlo- no el procesal-, si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negaran las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyo no es el sujeto que debe responder, y por eso el demandado debe ser absuelto”.



La Jurisprudencia trascrita en precedencia, nos sirve de apoyo jurídico para aunar en que la competencia no radica en la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, por lo tanto, no se propone fórmula conciliatoria.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 27 días del mes de febrero de 2024.



**MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ**  
**Secretaria Técnica**  
**Comité de Conciliación y Defensa Judicial**  
**Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**  
Proyecto: LCRC